



Sra. Salgueiro Cortiñas, Presidenta

Sr. Estella Hoyos, Consejero
Sr. Fernández Costales, Consejero
Sr. Pérez Solano, Consejero
Sr. Quijano González, Consejero
Sr. Nalda García, Consejero y Ponente

Sr. Besteiro Rivas, Secretario

La Sección Segunda del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Valladolid el día 18 de diciembre de 2003, ha examinado el *expediente relativo a la reclamación de indemnización de daños y perjuicios formulada por D. xxxx xxxxxxx xxxxxx*, y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad, el siguiente

DICTAMEN

I

ANTECEDENTES DE HECHO

El día 24 de noviembre de 2003 tuvo entrada en este Consejo Consultivo la solicitud de dictamen preceptivo sobre el *expediente relativo a la reclamación de indemnización de daños y perjuicios formulada por D. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, por los daños producidos por el oso, en un animal vacuno.*

Examinada la solicitud y admitida a trámite con fecha 2 de diciembre de 2003, se procedió a darle entrada en el Registro específico de expedientes del Consejo con el número de referencia 19/2003, iniciándose el cómputo del plazo para su evacuación, tal como dispone el artículo 53 del Decreto 102/2003, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo. Turnado por la Sra. Presidenta del Consejo, correspondió su Ponencia al Consejero Sr. Nalda García.

Primero.- Con fecha de 19 de mayo de 2003 se recibe en la Delegación Territorial de xxxxxxx, Servicio Territorial de Medio Ambiente, reclamación de indemnización, presentada por D. xxxxxxxl xxxxx xxxxxxxx, por los daños producidos por el oso, en un animal vacuno de raza "*Asturiana de los Valles*", propiedad del interesado, en la localidad de xxxxxxx, Reserva Regional de Caza de xxxxxxx.



Se estima que el daño se produjo el día 10 de mayo de 2003, siendo notificado el mismo día al agente forestal quien asistió el día 13 siguiente, manifestando: *"los indicios apuntan a daños producidos por el oso."*

La valoración del daño, realizada el día 22 de mayo, por el Jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas, asciende a la cantidad de 905 Euros.

Este es el relato de los hechos, tal y como se desprende del expediente, ya que en el análisis de los antecedentes descritos en la propuesta de resolución, se observa falta de correlación entre las fechas. Se dice que el 10 de mayo se recibe en el Servicio Territorial de Medio Ambiente reclamación de daños, cuando de la solicitud se desprende que ésa es la fecha en la que aproximadamente se produjo el daño y en la que se notifica al agente forestal el hecho dañoso. El día 13 de mayo el interesado firma la solicitud, registrándose en la Junta de Castilla y León, Delegación Territorial en xxxxxxxx, el día 19 del mismo mes.

Segundo.- Con fecha de 22 de mayo de 2003, el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en xxxxxxxxxxxx, en ejercicio de las competencias que tiene atribuidas por el artículo 19 del Decreto 297/1999, de 18 de noviembre, de atribución de competencias de la Junta de Castilla y León al Consejero de Medio Ambiente y de desconcentración de otras en sus Órganos Directivos Centrales y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León, nombra al Instructor del expediente, notificándose al interesado el 4 de junio de 2003.

Tercero.- El día 17 de julio de 2003, concluida la instrucción del expediente, se da audiencia y vista del mismo a interesado (recibiendo tal notificación el día 23 del mismo mes), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, a efectos de que formule las alegaciones y presente los documentos y justificaciones que estime oportunos, sin que el interesado, concluido el plazo concedido al efecto, presente alegación alguna.

Cuarto.- La propuesta de resolución entiende que procede estimar la reclamación presentada por D. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.



Quinto.- La Asesoría Jurídica de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en xxxxxxxxx, en escrito de 23 de octubre de 2003, informa favorablemente la propuesta estimatoria.

Sexto.- El expediente remitido a ese Consejo consta de un índice numerado de documentos sin foliar, como sería conveniente para facilitar su manejo.

Y, en tal estado del expediente, V.E. dispuso su remisión al Consejo Consultivo de Castilla y León para que evacuara dictamen.

II CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León emite dictamen en el presente expediente, con carácter preceptivo, de conformidad con lo prevenido en el artículo 4.1.h,1º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, correspondiendo a la Sección Segunda emitir el dictamen de acuerdo con lo establecido en el punto 4º, regla B), apartado g), del Acuerdo de 30 de octubre de 2003, del Pleno, por el que se determina el orden, composición y competencias de las Secciones.

2ª.- El artículo 106.2 de la Constitución establece que *"los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos"*.

La referencia constitucional a la Ley debe entenderse hecha a los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Tales preceptos han sido desarrollados reglamentariamente por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el *Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial*.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, SSTS de 1-3-1998; 21-4-1998; 29-10-1998; 28-1-1999; 1 y 25-10-1999), así como la



doctrina del Consejo de Estado (dictámenes de 27-3-2003, expte. N° 183/2003; 6-2-2003, expte. N° 3583/2002; y 9-1-2003, expte. n° 3251/2002), la responsabilidad patrimonial de la Administración pública exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

b) El carácter antijurídico del daño, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, de acuerdo con la Ley.

c) La imputabilidad a la Administración de la actividad dañosa, es decir, la integración del agente en el marco de la organización administrativa a la que pertenece o la titularidad pública del servicio o la actividad en cuyo ámbito se produce el daño.

d) La relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, nexos causal que implica la necesidad de que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa en relación directa e inmediata.

e) Ausencia de fuerza mayor.

f) Que no haya transcurrido un año desde el momento en que se produjo el hecho causante.

3ª.- El procedimiento administrativo seguido para la instrucción del expediente en este supuesto se ajusta a los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, posteriormente desarrollado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueban los procedimientos a seguir por las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

La reclamación del interesado fue deducida dentro del plazo de un año que para ello existía, siendo presentada por persona legitimada para actuar como parte interesada en el presente procedimiento, en cuanto perjudicada patrimonialmente como consecuencia de los daños sufridos, según resulta de los documentos incorporados al expediente.



4ª.- Una vez realizadas estas consideraciones previas, en relación con la cuestión que nos ocupa, hemos de decir que, el Consejo Consultivo, a la vista de los hechos alegados, estima que concurren en el presente caso los requisitos exigidos por el Decreto 108/1990, de 21 de junio, que declara indemnizables los daños y perjuicios que ocasionalmente pueda causar el oso pardo.

Dicha norma establece en su artículo 3, apartado 7º, que serán indemnizables, previo el correspondiente expediente, los daños y perjuicios que ocasionalmente pueda causar esta especie en la Comunidad, una vez que sean debidamente comprobados.

No resulta procedente fundamentar la responsabilidad de la Administración en el artículo 12 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, puesto que dicho precepto se refiere a "*daños producidos por las piezas de caza*", definidas en el artículo 9 de la misma Ley como "*cualquier ejemplar de las especies declaradas cazables en las Órdenes Anuales de Caza*". Las Órdenes Anuales de Caza determinan cuáles de las especies cinegéticas serán cazables en cada temporada de caza en función de su situación poblacional y sanitaria, u otros factores que se estimen determinantes, y el Decreto 172/1998, de 3 de septiembre, por el que se declaran las especies cinegéticas de Castilla y León, no incluye entre éstas al oso.

En el caso que nos ocupa, parece que está acreditado que los daños fueron producidos por un oso procedente de la Reserva Regional de Caza "xxxxxxx", por tanto, la Junta de Castilla y León debe indemnizar en la cuantía correspondiente.

No obstante, y aunque en este dictamen el Consejo Consultivo acepte la valoración favorable que hacen los Servicios de la Junta de Castilla y León, sobre la existencia de responsabilidad patrimonial, si bien, motivada en fundamentos diferentes, hemos de advertir que, para que haya lugar a la estimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial, resulta necesario que quede acreditado de modo indubitado que el daño fue producido por un oso.

Sería aconsejable que los informes de los Agentes Forestales fueran lo más exhaustivos posible sobre las circunstancias y características del daño apreciado, como el propio modelo normalizado de solicitud de indemnización de daños producidos por fauna salvaje así determina, al requerir que se consigne, en su caso, la existencia de "*restos, arañazos, huellas, etc.*".



**CONSEJO
CONSULTIVO**
DE CASTILLA Y LEÓN

III CONCLUSIONES

En mérito de lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina favorablemente la propuesta de resolución estimatoria de la reclamación de indemnización de daños y perjuicios formulada por D. xxxxxx xxxxxx xxxxxx, por entender que resulta conforme con el ordenamiento jurídico.

V.E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.